



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 14/09/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2019-00225-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Fanny del Socorro Gutiérrez Blanco
Demandado	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaria de Educación.
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informándole que el termino otorgado a las partes para que se pronuncien sobre el contrato de transacción presentado por la Fiduprevisora S.A. y consecuente terminación del proceso, se encuentra vencido. Igualmente le informo sobre el memorial presentado el día 11 de septiembre de 2020, en el cual se anexa el contrato de transacción suscrito y los anexos del mismo, donde se destaca copia de la Resolución No. 13878 del 28 de julio de 2020. Li informa además que se presentó memorial de sustitución de poder por parte del apoderado de la Fiduprevisora.

PASA AL DESPACHO
Para decidir sobre la terminación del proceso por transacción

CONSTANCIA
La parte demandante presentó solicitud de terminación del proceso el 28 de agosto de 2020. El apoderado del Distrito de Barranquilla se pronunció sobre la solicitud de terminación del proceso, a través de memorial presentado el 04 de septiembre de 2020.

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2019-00225-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Fanny del Socorro Gutiérrez Blanco
Demandado	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaria de Educación.
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede, y revisada la foliatura del expediente, efectivamente el Despacho observa que el auto del 28 de agosto de 2020, por medio del cual se puso en conocimiento la solicitud de terminación del proceso de la referencia por haberse suscrito un contrato de transacción entre la Fiduprevisora S.A. y la parte demandante, se encuentra debidamente ejecutoriado, y el término del traslado se encuentra vencido, en el que las partes se pronunciaron sobre el mismo, por lo tanto, es del caso resolver sobre la mencionada solicitud.

En efecto se observa el memorial presentado por la apoderada judicial de la Fiduprevisora S.A., quien defiende los intereses de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del cual aporta el contrato de transacción suscrito entre las partes, en el cual se pactó el pago la suma de \$10.129.003,13 pesos correspondiente al 85% de las pretensiones; solicita la aprobación de la misma y la consecuente terminación del proceso.

Procede a continuación el Despacho a resolver la referida solicitud, previo el recuento de los siguientes antecedentes:

La señora Fanny del Socorro Gutiérrez Blanco, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitando la vinculación del – Distrito de Barranquilla – Secretaria de Educación Distrital, en la que pide se declare la nulidad del acto ficto presunto producto de la petición elevada el día 18 de enero de 2019, y como restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Presentada el 30 de septiembre de 2019, la demanda fue admitida mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2019 (fls. 32-34), siendo notificada en debida forma las entidades demandada, así como el Ministerio Público y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, corriéndose los 25 días de termino común, así como el traslado de los 30 días dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

La entidad demandada Distrito de Barranquilla el día 19 de diciembre de 2019, dio contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

Encontrándose vencido el término para contestar la demanda, y estando presente el trámite de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, la parte demanda Fiduprevisora S.A., quien defiende los intereses de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, allegó contrato de transacción contenido en tres (8) folios, y como consecuencia solicita del Despacho su aprobación y se dé por terminado el proceso.

Por medio de auto de 28 de agosto de 2020, se ordenó poner en conocimiento de las partes los documentos presentados por la Fiduprevisora S.A.

En la misma fecha, la parte demandante, a través de su apoderado judicial, presentó memorial pronunciándose sobre el contrato de transacción, manifestando: *“(…) para manifestar que la propuesta conciliatoria de fecha 17 de Julio de 2020, presentada a su despacho por la parte demandada NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, estimada en la suma de \$ 8.609.653 pesos correspondiente al 85% de las pretensiones y aceptada por nosotros como demandantes, se decidió por las partes acogernos al artículo 312 del C.G.P. que determina: “trámite. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la Litis.” Al efecto, se ha firmado el contrato de transacción de fecha 14 de agosto de 2020, con el cual se está poniendo fin al litigio, por pago total de la obligación, pago realizado a mi cliente el día 24 de agosto de 2020.”*

Por su parte, el Distrito de Barranquilla, se pronunció el 04 de septiembre de 2020 coadyuvando la petición presentada por la Fiduprevisora S.A.

Se anticipa el Despacho a señalar que accederá a la solicitud de terminación del proceso por transacción celebrada entre las partes, por los motivos que pasan a exponerse:

- Requisitos para aceptar los efectos procesales de los Contratos de Transacción.

El artículo 2469 del Código Civil, define la transacción en los siguientes términos: *“[l]a transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”*, siendo así, si quienes tienen desacuerdos sometidos al *arbitrio judicis* llegan a alguna concertación, lo lógico es que la pongan en conocimiento del funcionario, con el fin de que lo convalide en lo pertinente, siempre y cuando las pretensiones objeto de la misma sean por su naturaleza conciliables, por consiguiente puede afirmarse que serían transigibles los conflictos ventilables a través de las acciones de nulidad y restablecimiento, reparación directa y contractuales, tal como sucede con la conciliación.

Es importante precisar que, no son susceptible de transacción las acciones públicas tales como la anulación, las electorales y las de rango constitucional, puesto que los derechos discutidos no tienen el carácter de renunciables por estar precisamente en juego los intereses generales de la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales y los derechos e intereses colectivos, no susceptible de convenio entre las partes.

El artículo 176 de la Ley 1437 de 2011, en relación al allanamiento a la demanda y transacción, dispone:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“Art. 176. - Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán previa autorización expresa escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde o de la autoridad que las represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas. En los casos de órganos u organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla el servidor de mayor jerarquía de la entidad.

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga en el proceso.

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción.”

Como es de apreciarse, la norma arriba citada no reglamenta de manera completa el tema de la transacción, remitiéndose así al estatuto procesal civil, en el que se regula la oportunidad y el trámite para terminar el proceso por transacción.

Los artículos 312 y 313 del C.G del P., al que nos remitimos por disposición expresa del artículo 306 de la ley 1437 de 2011, preceptúan:

“Artículo 312. Trámite. *En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.*

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este, continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.

Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas señalará fecha y hora para audiencia.”

“ARTÍCULO 313. TRANSACCIÓN POR ENTIDADES PÚBLICAS. *Los representantes de la nación, departamentos y municipios no podrán transigir sin autorización del Gobierno Nacional, del gobernador o alcalde, según fuere el caso.*

Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover el proceso en que intervenga una de las mencionadas entidades la transacción deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza.”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

La transacción está contemplada en el Código General del Proceso como una de las formas de terminación anormal del proceso, lo que ocurre cuando el acuerdo envuelve en su integridad la cuestión debatida, sin embargo esto no obsta para que se admita su procedencia cuando recae sobre una parte del pleito o se relaciona con cuestiones posteriores al fallo que lo defina.

Para que se den los efectos procesales pretendidos por los concordantes, la solicitud de aprobación debe ser formulada al funcionario que esté conociendo el asunto, ya sea para tenerlo por culminado o para delimitar la incidencia que esa convención tiene, en lo que es de su competencia, determinando qué puntos quedan superados y cuáles siguen pendientes de resolver.

El Consejo de Estado al decidir sobre la solicitud de terminación del proceso por la celebración de un contrato de transacción entre las partes, luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial sobre la materia, a manera de conclusión, señala:

“En ese orden, de las definiciones legales y jurisprudenciales expuestas en la jurisprudencia en comento se extraen tres elementos que caracterizan a la transacción: (i) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio; (ii) la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme, y (iii) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas. Esos elementos deberán acompañarse del cumplimiento de las siguientes exigencias: (i) la observancia de los requisitos legales para la existencia y validez de los contratos; (ii) recaer sobre derechos de los cuales puedan disponer las partes, y (iii) tener capacidad, en el caso de los particulares, y competencia, en el evento de entidades públicas, para vincularse jurídicamente a través de un contrato de esa naturaleza.”¹

En consecuencia, procederá el Despacho a determinar si en el caso concreto se cumple con todos los requisitos jurisprudenciales y legales para la procedencia de la transacción como medio de terminación anormal del proceso.

Caso Concreto

Tal como se menciona en líneas anteriores, la apoderada de La Fiduprevisora S.A., quien defiende los intereses de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con memorial calendado el 21 de agosto de 2020, anexa el contrato de transacción en el que, por una parte el señor Luis Gustavo Fierro Maya, identificado con la cédula de ciudadanía N° 93.953.861, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, por otra el abogado Edwin Alarcón Olivera, actuando como apoderado judicial de la señora Fanny del Socorro Gutierrez Blanco identificada con la C.C. No. 22.401.078, que para efectos del contrato se denomina el demandante.

En el mencionado contrato de Transacción suscrito por las partes se estableció:

“ACUERDO:

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO, auto del 28 de mayo de 2015, Radicación número: 05001-23-31-000-2000-04681-01(26137) Actor: COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (AUTO APRUEBA O ACCEDE SOLICITUD DE TERMINACION DE PROCESO POR TRANSACCION)



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. *Transar las obligaciones derivadas de los procesos judiciales que pretenden el reconocimiento y pago de sanción por mora en el pago tardío de las cesantías solicitadas por los docentes del FOMAG, para precaver eventuales condenas en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.*

CLAUSULA SEGUNDA: *En cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2020 de 2019 y realizado el análisis económico y jurídico de los procesos judiciales descritos en este acuerdo, así como los riesgos y gastos derivados hasta el momento, las partes acuerdan resolver sus diferencias mediante transacción extinguiendo la obligación que dio lugar a los litigios mediante la firma del presente contrato.*

CLAUSULA TERCERA: *Las partes acuerdan hacer mutuas concesiones para evitar una eventual condena derivada de los procesos judiciales a que se refiere este acuerdo, en los siguientes términos:*

3.1. *El doctor EDWIN ANTONIO ALARCON OLIVERA como apoderado facultado para transar el asunto descrito en la cláusula primera de este contrato, se obliga a:*

- *En procesos judiciales cuya liquidación de la sanción por mora corresponda a un valor inferior a \$10.000.000, a renunciar al 10% del valor de la liquidación.*
- *(...)*
- *Renunciar a instaurar procesos judiciales frente a las pretensiones del litigio suscitado en los procesos judiciales objeto del presente acuerdo.*
- *El apoderado se compromete a radicar memoriales a todos los despachos judiciales donde se encuentran en curso los doce (12) procesos judiciales de la cláusula cuarta del presente contrato, con el fin de dar a conocer a la autoridad judicial el acuerdo transaccional, dentro del día hábil siguiente a la firma del presente contrato.*
- *El apoderado se compromete a desistir dentro de los tres (3) días siguientes, de todos los procesos judiciales una vez la Fiduprevisora S.A. realice el pago de la transacción cuya liquidación certifica mediante radicado 2020-ER-17617 de fecha cinco (5) de agosto de 2020, pactado en el presente contrato.*

3.2. *Por su parte la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se compromete a ordenar a la Fiduprevisora S.A. como administradora y vocera del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio, remitir memoriales a todos los despachos judiciales donde cursa los procesos judiciales que se transan en el presente contrato, con el fin de coadyuvar el desistimiento que el apoderado se compromete a radicar, así como también a ordenar el pago del valor ordenado en los procesos judiciales a que se refiere este acuerdo, de la siguiente manera:*

- *En procesos judiciales cuya liquidación de la sanción por mora corresponda a un valor inferior a \$10.000.000, a renunciar al 10% del valor de la liquidación.*
- *En procesos judiciales cuya liquidación de la sanción por mora corresponda a un valor superior a \$10.000.000 e inferior a \$22.000.000, pagar el 85% del valor de la liquidación.*
- *(...)*



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

CLAUSULA CUARTA: PAGO. FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2020 de 2019, dentro de los ocho (8) días siguientes a la celebración del presente contrato, realizará el pago poniendo a disposición los recursos en ventanilla de la entidad bancaria, conforme a la liquidación remitida mediante su comunicación 2020-ER-176173 de fecha 5 de agosto de 2020, en la cual se relación detalladamente cada uno de los procesos judiciales a reconocer y pagar en los términos aquí dispuestos, documento que hace parte integra de este contrato, sin perjuicio de lo cual se relacionan a continuación:

(...)

No.	DOCUMENTO DOCENTE	NOMBRE COMPLETO	NUMERO RESOLUCION	RADICADO	VALOR MORA	VALOR A TRANSAR	RECOMENDACIÓN DE LA FIDUCIARIA AL COMITÉ DE CONCILIACION
5	22401078	FANNY SOCORRO GUTIERREZ BLANCO	7609	08001333301420190022500	\$10.129.003,13	\$8.609.652,66	TRANSAR

CLAUSULA QUINTA: De conformidad con lo señalado en el artículo 2483 del Código Civil, las partes reconocen que la presente transacción hace tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, se declaran mutuamente en paz y salvo en relación con la sanción por mora en el pago extemporáneo de las cesantías de los docentes y demás emolumentos derivados de los procesos judiciales a que se refiere este contrato. Asimismo, renuncian en mutuo y reciproco beneficio a cualquier acción judicial en razón a los asuntos objeto de esta transacción, por la reclamación efectuada y especificada en el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: Las partes declaran y garantizar que: (i) cada una de las partes ha obtenido los correspondientes permisos y autorizaciones para poder celebrar la presente transacción; (ii) el presente acuerdo transaccional es un acuerdo final y vinculante y, una vez haya sido aprobado, producirá efectos de cosa juzgada en todos los asuntos incluidos en el mismo; y (iii) cada parte ha realizado los estudios legales y económicos necesarios para proceder a la firma de la presente transacción.

CLAUSULA SEPTIMA: El Apoderado EDWIN ANTONIO ALARCON OLIVERA declara que en los eventos en los cuales, las autoridades judiciales dicen sentencia respecto de los procesos judiciales objetos de la transacción, después de firmado y perfeccionado el presente contrato se entenderán transadas las sentencias judiciales por los mismos porcentajes pactados en el presente acuerdo, renunciando a costas, indexación, intereses corrientes y moratorios, y a los porcentajes indicados en la cláusula tercera del presente contrato, y a los emolumentos adicionales que llegaren a ordenarse en el titulo judiciales, declarando el cumplimiento de la sentencia por los términos acá pactados.

CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato de transacción se perfecciona una vez sea suscrito por las partes.

(...)”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Este Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en las normas legales sobre transacción, contenidas en el artículo 312 del Código General del Proceso al que nos remitimos por disposición expresa del artículo 306 de la ley 1437 del 2011, pasa a revisar el contrato de transacción de la referencia, a fin de determinar si se acepta o no para que produzca efectos procesales, en éste caso, la terminación del proceso.

Revisado el contrato de transacción suscrito entre el señor Luis Gustavo Fierro Maya, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, y el abogado Edwin Antonio Alarcón Olivera, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante, encuentra el Despacho que tienen facultades suficientes para suscribir dicho contrato de transacción, puesto que en la Resolución No. 013878 del 28 de julio de 2020, expedida por la Ministra de Educación Nacional, se autoriza y delega la facultad de transigir en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional.

De igual forma y en relación con el apoderado del demandante, de manera expresa en el poder otorgado, se anota que tiene facultad para llegar a un acuerdo de transacción, cumpliéndose de esa manera con lo dispuesto por el artículo 176 de la ley 1437 de 2011, en relación a la autorización para transigir.

Analizado el contrato de transacción, el Despacho advierte que el acuerdo suscrito por las partes, en el cual la entidad demandada Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como pagadora, se compromete a cancelar un valor del 85% de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, a la demandante Fanny del Socorro Gutiérrez Blanco, derivados del pago no oportuno de las cesantías parciales que le fueron reconocidas a través de la Resolución No. 07609 del 22 de diciembre de 2015, cancelando la suma de ocho seiscientos nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos M/cte (\$8.609.652,66), cantidad que el demandado propone transar expresamente en el presente contrato.

Igualmente, y como quedó transcrito en líneas anteriores, en la cláusula octava del contrato de transacción el demandante se compromete “...-El apoderado se compromete a radicar memoriales a todos los despachos judiciales donde se encuentran en curso los doce (12) procesos judiciales de la cláusula cuarta del presente contrato, con el fin de dar a conocer a la autoridad judicial el acuerdo transaccional, dentro del día hábil siguiente a la firma del presente contrato”, hecho que demuestra su conformidad con lo pactado y su voluntad de desistir del presente proceso, y que fue cumplido el 28 de agosto de 2020, cuando el doctor Edwin Alarcón Olivera radicó al proceso el memorial informando el desistimiento de la demanda por haberse transado la obligación.

Conforme a ello, no encuentra el Despacho que con dicho acuerdo transaccional se estén vulnerando los derechos subjetivos de la parte actora dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la referencia, pues la condena en este evento, se pretende del ente demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como tampoco se advierte un detrimento injustificado a la entidad pública demandada, por cuanto lo estipulado en el contrato de transacción guarda correspondencia con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, esto es, el pago del 85% de la sanción de la mora, con renuncia de intereses corrientes e indexación, lo cual fue aceptado de manera voluntaria por el demandante.

Así las cosas, toda vez que el contrato de transacción fue celebrado válidamente entre las partes, pues consta por escrito, no causa detrimento injustificado al patrimonio de la entidad



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

pública demandada, y se encuentra suscrito por las personas legalmente facultadas para obligar a las partes involucradas en el proceso de la referencia, el Despacho accederá a la solicitud de terminación del proceso por transacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 del Código General del Proceso.

En aplicación a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 312 del C.G. del P., el Despacho se abstendrá de condenar en costas a la entidad pública demandada, por cuanto las partes llegaron a un acuerdo sobre las pretensiones reclamadas en el proceso de la referencia sin que hubiesen hecho alguna manifestación frente a las costas del proceso.

Por otro lado se observa el memorial suscrito por el doctor Luis Alfredo Sanabria Rios, en su calidad de apoderado de la Nación Ministerio de Educación y de la Fiduciaria La Previsora S.A., donde manifiesta que sustituye el poder a él conferido a la doctora Rosanna Liseth Varela Ospino, por lo cual se le reconocerá personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce (14°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla,

R E S U E L V E

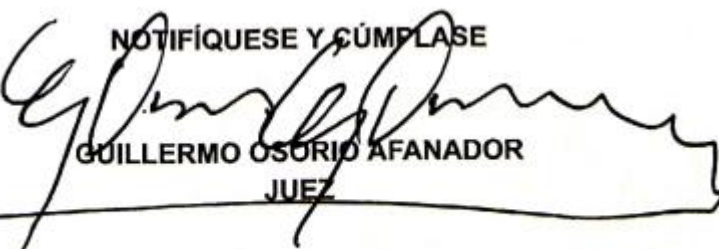
PRIMERO.- ACCEDER a la solicitud de terminación del proceso presentada por las partes demandante y demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con ocasión a la celebración del contrato de transacción, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLARAR terminado el proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 312 del Código General del Proceso.

TERCERO.- No habrá lugar a condena en costas de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 312 del Código General del Proceso.

CUARTO.- Reconocer personería adjetiva para actuar a la doctora Rosanna Liseth Varela Ospino, como apoderada sustituta de la demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

QUINTO.- Una vez en firme esta providencia, por Secretaría archívese el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 102 DE HOY 15/09/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA